



CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
SECRETARÍA DE ACCIÓN SINDICAL

17

BOLETÍN INFORMATIVO JURÍDICO SINDICAL

Ampliación de Competencias de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo

Posición de la CGT
Guión y desarrollo Jurídico

Nº 17 / 10 - I - 97

En la última Plenaria Confederal, se planteó la nueva situación creada respecto al papel que podrían jugar las Mutuas y Empresas Autoprestadoras a partir de la nueva regulación, este Informe pretende ser un intento de clarificar el alcance de estas medidas

INTRODUCCION.-

A partir de la **Ley 42/1994 de medidas fiscales, administrativas y del orden social**, se comienza a crear el marco normativo necesario para **ampliar las competencias de las Mutuas de Accidentes de Trabajo**, hasta ahora reducidas a las contingencias derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, para permitirles la gestión de las prestaciones económicas por **Incapacidad Temporal (IT) derivada de enfermedad común y accidente no laboral**.

Esta nueva competencia aparece regulada a partir de ese momento, además de en la mencionada Ley, en el **R.D. 1993/95** sobre el funcionamiento de la Mutuas, en la **Orden Ministerial de 2 de agosto de 1.995** sobre la constitución y funcionamiento de las Comisiones de Control y Seguimiento y en la **Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1.997**, quedando todavía pendiente su desarrollo reglamentario.

FORMA Y EFECTOS DE LA AMPLIACION:

La Ley 42/1994 establece por primera vez la posibilidad de ampliar las competencias de las Mutuas Patronales Accidentes de Trabajo, a las prestaciones económicas por Incapacidad Temporal derivada de **enfermedad común y accidente no laboral**.

Así mismo, esta ampliación de competencias se hace extensiva además a **las empresas autoprestadoras** que ya venían ejerciendo anteriormente la colaboración voluntaria con la Seguridad Social en materia de Accidentes de trabajo, y por ello, cuando hablemos de Mutuas, hay que entender que nos referimos además a estas empresas autoprestadoras.

Actualmente la condición de empresa autoprestadora solo la obtienen aquellas empresa con un volumen de plantilla lo suficientemente amplio, que dispongan de **Servicios Médicos propios** y consigan la **oportuna autorización del Ministerio**.

Esta nueva colaboración de las Mutuas deberá ser regulada posteriormente mediante **su oportuno Reglamento**, no obstante la Ley deja perfectamente claro que el control sanitario de las altas y bajas corresponderá, en todo caso, al sistema público, es decir al INSALUD o a los correspondiente Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas que ejerzan las competencias en materia de Asistencia Sanitaria.

En este sentido, el R.D. 1993/95 que regula el funcionamiento de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, establece que **las empresas** que tengan concertada la prestación de las contingencias derivadas de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional con una Mutua, **podrán optar porque la cobertura de la prestación económica por I.T., derivada de contingencias comunes** de su personal, se lleve a cabo por la misma Mutua.

Esta colaboración tendrá una duración inicial de un año, prorrogándose tácitamente por periodos anuales, y, con un trámite previo obligatorio, que consiste en la aportación, junto con la propuesta de asociación, del preceptivo informe remitido por el Comité de Empresa o los Delegados de Personal.

Una vez formalizada esta opción, **la Mutua abonará la prestación económica en la cuantía y con sujeción a las condiciones reguladas para dicha prestación en el Régimen General de la Seguridad Social**, por lo que, en principio, no debería existir ningún perjuicio para los trabajadores afectados, pero desde el momento que esta nueva competencia va a suponer un gasto adicional para las Mutuas, es fácil adivinar que por algún lado tienen que sacar beneficio.

La Norma establece que el coste de la gestión administrativa, así como el coste de las actuaciones de seguimiento y control médico, correrá a cargo de la Mutua, percibiendo ésta de la Tesorería General de la Seguridad Social **la fracción de las cuotas que se determine por el Ministerio**, a efectos de compensación.

Esto ya nos da una idea de por donde podían venir las posibles competencias que esta medida atribuye a las Mutuas, y que posteriormente han sido ratificadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 97.

El R.D. 1993/95 ya establece como competencias adicionales de las Mutuas las siguientes:

- 1.- Ejercerán, a través de los servicios médicos de que dispongan, **el seguimiento y control de las prestaciones otorgadas por I.T. derivada de contingencias comunes** del personal al servicio de sus empresas asociadas, pudiendo instar la actuación de la Inspección Médica.

2.- Aunque el trabajador continuará recibiendo la asistencia sanitaria del órgano público correspondiente (INSALUD), **la Mutua tiene potestad para someterle a los controles médicos propios** que estime convenientes.

3.- **Las Mutuas podrán establecer acuerdos de colaboración** con el INSALUD, o con los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.

Estos acuerdos deberán someterse a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social previamente a su entrada en vigor, y en ningún caso podrán afectar a las competencias del Sistema Público en el control sanitario de las atas y bajas.

En este mismo sentido, la Ley de Presupuestos General del Estado para el año 1997 establece que **los médicos adscritos a las correspondientes Entidades Gestoras o Mutuas Patronales podrán formular propuestas de alta médica a la Inspección Médica** con los efectos que se determinen reglamentariamente y que sean consecuencia de su actividad de control a la que vienen obligados los trabajadores para la percepción de las prestaciones.

Además este desarrollo reglamentario deberá regular otros aspectos como son:

- Mecanismos para que el personal facultativo sanitario, tanto del sistema público como de las Mutuas, **puedan acceder a los diagnósticos e historial clínico de los trabajadores.**
- Procedimientos para la **formulación de reclamaciones.**
- **Seguimiento de la evolución de las reclamaciones** a través de las Comisiones de Control y Seguimiento.

Estas Comisiones de Control y Seguimiento se crean por la **Orden Ministerial de 2 de agosto de 1.995**, para su constitución en todas y cada una de las Mutuas.

Su composición es paritaria, correspondiendo la mitad de sus miembros a la **representación de los trabajadores protegidos por la Mutua**, a través de los Sindicatos más representativos del ámbito de actuación de la entidad, y la otra mitad, excluido su presidente, **por la representación de los empresarios asociados** a la misma, siendo el Presidente el que lo sea de la Junta Directiva de la Mutua.

El número de componentes dependerá del volumen de las cuotas de Seguridad Social recaudadas.

VALORACION:

Lo que en principio parece una simple modificación administrativa que no tendría por qué suponer ningún perjuicio para los trabajadores, en realidad esta medida va a repercutir sustancialmente en las relaciones entre el trabajador y la empresa.

Las competencias adicionales que se otorgan a los Servicios Médicos de la Mutua en el sentido de

- **Propuestas de Alta Médica a la Inspección Médica**
- **Control del absentismo laboral**
- **Seguimiento riguroso de los procesos médicos**
- **Realización de controles médicos a los trabajadores**

Van a suponer irremediamente una presión adicional para los trabajadores que a la larga puede degenerar en **retenciones para darse de baja por enfermedad**, poniendo en peligro su salud al desempeñar su actividad con sus condiciones físicas mermadas.

Pero lo más grave es que los Servicios Médicos de las Mutuas, en sus propuestas de alta médica, **van a estar siempre condicionados por criterios empresariales de productividad**, manteniendo en segundo plano los aspectos sanitarios, y en la medida que estas propuesta puedan vincular de alguna manera a los servicios públicos de salud, parece claro que se producirá un grave perjuicio para el trabajador afectado.

Con el agravante del **incremento de conflictividad** que se puede generar con este tipo de medidas, lo que en definitiva va a suponer un **aumento sustancial de los procesos judiciales por las discrepancias** que irremediamente se van a producir en el tratamiento de las bajas por I.T. derivadas de enfermedad común.

Tampoco podemos ignorar la **presión que se va a ejercer**, desde la posibilidad de Proponer Altas al Inspector Médico, **sobre los médicos de cabecera**, así como la introducción de un mecanismo más para avanzar en **la privatización de la Sanidad**.

El único aspecto que permanece inalterable es que la tramitación de las altas y bajas médicas va a seguir dependiendo de los servicios públicos de salud, pero mucho nos tememos que este sea solo el primer paso y que no se tardará demasiado en traspasar también el control de las altas y bajas a la Mutuas.

Por último, y a modo de resumen, debemos considerar como aspectos más preocupantes de esta nueva regulación:

- ▶ Va a suponer un mayor control del absentismo laboral por parte de las empresas en base a criterios puramente productivos, en detrimento de los aspectos sanitarios.
- ▶ Desde el momento que la gestión económica de las prestaciones pasa a depender de las empresas, es muy probable que se intente reducir al máximo la duración de las baja médicas para incrementar los beneficios empresariales.
- ▶ La presión de las Mutuas sobre los servicios públicos de salud va a ser determinante en la actuación de éstos, llegándose a constituir poco a poco **un sistema sanitario paralelo** que irá asumiendo cada vez más competencias y finalmente degenera en **la privatización de la sanidad pública**, quedando los servicios públicos de salud solo y exclusivamente como organismos administrativos para la tramitación de las altas y bajas.
- ▶ Se genera un perjuicio adicional a los trabajadores que además de seguir puntualmente al tratamiento que tengan marcado por su Médico de Area de la Seguridad Social pueden verse obligados a tener que someterse a reconocimientos especiales realizados por los médicos de la Mutua, que nunca serán imparciales, y en los que los criterios empresariales primarán sobre los sanitarios.

De todas formas tendremos que estar pendientes de la creación de las **Comisiones de Control y Seguimiento** en las empresa autoprestadoras o en las Mutuas en las que contemos con suficiente representación y de que se publiquen **los reglamentos de desarrollo de estas medidas** para comprobar el alcance definitivo que va a suponer esta ampliación de competencias.

Equipo Jurídico-Sindical
SECRETARIA DE ACCION SINDICAL
C.G.T.